



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN [REDACTED]
MATERIA: ADMINISTRATIVA.
AUTORIDAD RESPONSABLE RECURRENTE:
DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE
TECATE DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
PONENTE: MGDO. LIC. GERARDO MANUEL
VILLAR CASTILLO
SECRETARIO: LIC. JUAN MANUEL GARCÍA
ARREGUÍN

Mexicali, Baja California, acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el once de agosto de dos mil dieciséis.

VISTO, para resolver los autos del recurso de revisión [REDACTED] relativo al juicio de amparo [REDACTED] y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Demanda de amparo. Ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con residencia en Tijuana, Baja California, el veinte de enero de dos mil dieciséis, turnado el veintiuno siguiente al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado, [REDACTED] c. A. [REDACTED] [REDACTED] presentaron escrito en el cual solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Subprocurador para la Defensa del Menor y la Familia en Tecate, Baja California, del Desarrollo Integral Familiar; además, contra el Director del Hospital General de Tecate, Baja California.

En ese sentido, en la demanda de amparo los quejosos reclamaron de esas autoridades, lo siguiente:

“Reclamo las autoridades responsable la orden de quitarnos a nuestro hijo neonato y enviarlo a un albergue del DIF en Tecate, Baja California, quien



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
COLEGIADO
VTO CIRCUITO
BAJA CALIFORNIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORMA 20

- 3 -

en caso de considerar que existen indicios de posibles actos que coloquen en estado de vulnerabilidad a la menor sujeta a ese procedimiento, pero en uno distinto en el que se cumplan las formalidades del procedimiento puntualizadas en esta resolución. 2. En la misma resolución, deberá decretar la inmediata reincorporación de la menor que actualmente lleva el nombre de [REDACTED] Gu [REDACTED] a su núcleo familiar a lado de sus padres biológicos [REDACTED] mo [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] también conocidos como [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] según se advierte de la copia certificada del acta de nacimiento obrante en autos (foja 156), en el entendido de que su entrega deberá efectuarse sin condicionamiento alguno.

Segundo. Por concepto de reparación integral, se otorgan a los quejosos las medidas de satisfacción previstas en el artículo 73 fracciones III y IV, de la Ley General de Víctimas, consistentes en: 1. Una declaración oficial por parte de las autoridades responsables Subprocuradora para la Defensa del Menor y la Familia, y Director del Hospital General Tecate, ambos residentes en Tecate, Baja California; que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de los quejosos, y de las personas estrechamente vinculadas a ella. 2. Una disculpa pública de parte de las autoridades responsables antes mencionadas, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de sus responsabilidades en los actos reclamados en este juicio, en términos del considerando quinto de esta resolución. 3. Una publicación que deberán efectuar ambas autoridades responsables, en uno de los períodos de mayor circulación en el Estado de Baja California, de una síntesis explicativa a la sociedad, de los procedimientos que deben seguir dichas autoridades conforme a la normatividad constitucional, legal y reglamentaria que los rige; ante la actualización del supuesto en que un recién nacido, presente síntomas que sugieran que estuvo expuesto a la ingesta de algún narcótico. Con ello, lo que se pretende es que, las autoridades recapitulen sus facultades en aras del interés superior del niño, y que la sociedad conozca con puntualidad en qué medida los derechos de recién nacido y sus padres, pueden afectarse

legítimamente."

TERCERO. Recurso de Revisión. Inconforme con la sentencia mencionada, la autoridad responsable Director del Hospital General de Tecate dependiente del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, interpuso recurso de revisión, el que este Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito admitió el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, radicándose bajo el número [REDACTED]; el agente del Ministerio Público Federal, notificado en términos del artículo 26, fracción II, inciso c) de la Ley de Amparo, no formuló alegatos; y, una vez tramitado el recurso de revisión, sin que las partes expresaran alegatos o se interpusiera revisión adhesiva, el cuatro de julio del mismo año, se turnaron los autos al Magistrado relator para elaborar proyecto respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos: 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución General de la República; 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo; y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto primero, fracción XV del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día quince de febrero de dos mil trece, por tratarse de una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito ubicado dentro de la circunscripción territorial donde este Tribunal Colegiado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Oportunidad del Recurso. El recurso de revisión se interpuso dentro del término de diez





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORM 21

- 5 -

días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación de la sentencia impugnada, en término del artículo 86 de la Ley de Amparo.

En efecto, la sentencia impugnada se notificó al recurrente el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, la que surtió efectos el mismo día en términos de la fracción I del artículo 31 de la Ley de Amparo, al tratarse de la autoridad responsable.

De ahí que, el término para la interposición del recurso de revisión transcurrió del veinte de enero al tres de febrero de dos mil dieciséis, sin tomar en consideración los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero por ser sábados y domingos, así como el uno de febrero del presente año al resulta inhábil.

Por tanto, el recurso de revisión se interpuso en tiempo porque fue presentado ante la Juez de Distrito el dos de febrero de dos mil dieciséis.

TERCERO. Sentencia recurrida. No se transcribirán las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, pues el artículo 74 de la Ley de Amparo, no prevé esta obligación y no existe en dicha legislación precepto alguno que constriña a esta autoridad a realizar tal acción sin que esto deje en estado de indefensión al recurrente pues la determinación que se recurre obra en los autos originales que fueron remitidos por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado y el cual al constituir la base del análisis que se realiza, será tomado en cuenta en la parte considerativa de esta resolución.

Sirve de apoyo a lo anterior y se comparte el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXIII, marzo de 2006, página 2115, que dicta:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUNTA DE LOS SEÑORES JUECES
QUINTO CIRCUITO
CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA
MEXICO

"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.- El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver".

CUARTO. Expresión de agravios. Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no sólo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el máximo tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; de los cuales resulta innecesario realizar su transcripción ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlos; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación al principio de exhaustividad que rige las sentencias de amparo, cuenta habida que dicho principio se satisface al realizar un estudio completo de la controversia que se plantea.

Es de puntual aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dispone:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORMA B

- 7 -

primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer".

QUINTO. Incongruencia en la sentencia.

En la segunda parte del primero de los agravios, la parte recurrente argumenta, en resumen, que en la sentencia impugnada se inadvirtió el hecho de que la autoridad responsable destacó en su informe justificado que los actos atribuidos al Hospital General de Tecate, no correspondían a los de una autoridad para los efectos del juicio de amparo.

El aludido argumento resulta fundado.

A fin de sustentar lo anterior, es necesario precisar que al rendir su informe justificado, la autoridad responsable en comento, manifestó lo que sigue:

"Por medio del presente escrito, vengo a rendir el Informe Justificado requerido conforme a los siguientes términos:

Son parcialmente ciertos los actos reclamados por los quejosos, pero constitucionales por lo



IL. DE LA
ON
OLEGIADO
CIRCUITO
JFORNIA

que respecta a la autoridad que informa; sin embargo, los mismos no son actos de autoridad. Lo anterior, es así, en virtud de que esta unidad hospitalaria depende de un organismo descentralizado y solo se dedica a la prestación de servicios de salud y no es autoridad para los efectos del juicio de garantías. Y si bien es cierto la Quejosa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dio a luz en este nosocomio el 15 de enero de 2015, a la recién nacida de apellidos [REDACTED]; también lo es, que al momento de nacer presentó algunas complicaciones en cuanto a la tolerancia de la alimentación vía oral, por lo que se quedó hospitalizada algunos días y al hacerle los estudios de rigor esta resultó positiva a METANFETAMINA, de ahí que la intolerancia se debía al síndrome de abstinencia, hecho que personal de trabajo social de este hospital hizo del conocimiento a la SUBPROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DE TECATE, en cumplimiento al artículo 40 de la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Menores y la Familia, vigente en el Estado; así como los artículos 7, 12 y 50 fracción XIV de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente, ello para salvaguardar la integridad y derechos de la menor. Recibiendo el oficio TEC293/2015 de fecha 19 de enero en el que la SUBPROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DE TECATE ordena no autorizar el egreso de la menor y que se les diera aviso por escrito del alta médica, lo cual así aconteció el 20 del mismo mes y año; pasando a recoger a dicha menor personal de dicha Subprocuraduría debidamente acreditado el mismo día. Sin pasar desapercibido el error del área de laboratorio al establecer como masculino el sexo de la Recién Nacida con el resultado del estudio..."

De la transcripción parcial del informe justificado, se advierte esencialmente que la autoridad responsable hizo valer una causa de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que sostuvo que los actos reclamados al Hospital General de Tecate, Baja California, no constituían actos de autoridad, al depender de un organismo descentralizado que prestaba servicios de salud.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

27
FORMA B-1

- 9 -

Ahora bien, en la primera parte del considerando cuarto de la sentencia impugnada, se expresó lo siguiente:

“Cuarto. Por virtud de que no se advierte la existencia de alguna causa de improcedencia de este juicio, lo que corresponde es entrar al estudio de fondo del asunto planteado, analizando los conceptos de violación que formuló la parte quejosa y que estimó transgredían sus garantías individuales, a los que en obvio de repeticiones innecesarias se hace remisión...”

De lo expuesto, se desprende que en la sentencia impugnada se omitió el pronunciamiento en cuanto a la causa de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable al rendir su informe justificado, consistente en esencia, en el hecho de que los actos que se le reclamaron al Hospital General de Tecate, Baja California, no eran susceptibles de analizarse en el juicio de amparo por no ser de los considerados como de autoridad para tales efectos.

En ese sentido, es necesario apuntar que tratándose de las cuestiones de procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia no analizada por el juzgador, el Tribunal revisor debe emprender su estudio incluso de oficio, ya que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia constituyen un tópico que involucra el interés público cuyo análisis es obligatorio previo a resolver el fondo del asunto.

Efectivamente, en las sentencias de amparo no existe obligación de referirse necesariamente y de manera expresa a los argumentos que las autoridades responsables invocan para sostener la constitucionalidad del acto



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
TRIBUNAL COLEGIADO
QUINTO CIRCUITO
Baja California

reclamado, en la medida en que la litis se integra con el acto reclamado y los conceptos de violación que se expresan por la parte quejosa. Sin embargo, cuando en el informe justificado las autoridades responsables invocan una determinada causa de improcedencia, en la sentencia se debe atender dicha manifestación, pues como se precisó el análisis de las causas de improcedencia, involucra un tema que es de orden público.

De tal forma, que si en el caso particular en la sentencia impugnada no se analizó la mencionada causa de improcedencia, en el recurso de revisión es necesario que se emita el pronunciamiento conducente a fin de emitir una sentencia congruente atendiendo a los principios de exhaustividad que rigen la actuación de los órganos jurisdiccionales; y, en las relatadas condiciones, se advierte que asiste razón al inconforme puesto que aun cuando el juez de amparo se encontraba obligada a atender la aludida causa de improcedencia, la soslayó, lo que concomitantemente implica que en el recurso de revisión se aborde su análisis.

SEXTO. Análisis de la causa de improcedencia soslayada en la sentencia recurrida.

Como se precisó en el considerando que antecede, al rendir su informe justificado el Hospital General de Tecate, Baja California, indicó que resultaba improcedente el juicio de amparo debido a que sus actos no constituían aquellos considerados como de autoridad para los efectos del juicio porque dependía de un organismo descentralizado que solo tenía por objeto prestar servicios de salud.

Carece de razón la autoridad responsable.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido un criterio que define las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo.

La Suprema Corte fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

- 11 -

posibilidad de que un ente realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado.

Ahora bien, el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo dispone lo que sigue:

"Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:

[...]

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general..."

Del contenido del precepto transcrito, se advierte que definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe tenerse en cuenta: La existencia de un ente, independientemente de su naturaleza formal; que emita actos jurídicos, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omite hacerlos; que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria; y, que como consecuencia de ello, exista una relación de supra a subordinación con el particular afectado.



Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que precisa el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo sigue esencialmente las notas distintivas para definir cuando una autoridad tiene ese carácter para los efectos del juicio de amparo, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

Así, conforme al numeral 5 de la Ley de Amparo, la característica principal que da pauta a que los actos de particulares puedan considerarse como de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas.

En esa medida se concluye que aun cuando el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo precisa como actos impugnables en amparo aquellos que sean de particulares cuando sean "equivalentes" a los de las autoridades, no se refiere a otro supuesto jurídico sino cuando el particular, realice "actos de autoridad" alejado de su ámbito privado.

De ahí que, deba destacarse que la característica distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable" consiste en el ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad.

También debe decirse que para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo las notas distintivas de los actos de autoridad están regidas por la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

29
FORMA B-1

- 13 -

administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; y que a su vez, emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular, sin que para emitirlos requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado.

En consecuencia, el acto de autoridad al que en su caso debe ser "equivalente" el acto del particular, tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los intereses jurídicos de los gobernados.

Ahora bien, los artículos 6, 7, 37 y 38 de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, establecen lo que sigue:

"ARTÍCULO 6.- El Sistema Estatal de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y Municipios, por las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones establecidos para dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

El Sistema Estatal de Salud, con la intervención que corresponda al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, definirá los mecanismos de coordinación y colaboración en materia de planeación de los servicios de salud en el Estado, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y las disposiciones aplicables".

"ARTÍCULO 7.- El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos:

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población del Estado y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios



prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, o signifiquen riesgos para la misma, con especial interés en la implementación e impulso de las acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde a la edad, sexo y factores de riesgo de las personas”

“ARTÍCULO 37.- Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en:

I.- Servicios públicos dirigidos a la población en general;

II.- Servicios a derechohabientes;

III.- Servicios sociales y privados; y

IV.- Otros que se presten de conformidad con lo que establezcan las Autoridades Sanitarias”.

“ARTÍCULO 38.- Son servicios públicos dirigidos a la población en general, los que se presten en establecimientos públicos de salud a los habitantes del Estado que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad fundada en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando carezcan de recursos económicos, atendiendo en su caso a los estudios socioeconómicos que se realicen.

Los servicios públicos de salud que otorguen los establecimientos públicos pertenecientes a la Secretaría de Salud Pública del Estado tratándose del otorgamiento de medicamentos que formen parte del cuadro básico de medicinas, por medio de recetas a través de sus farmacias serán de manera gratuita, tratándose de medicamentos que integran el cuadro básico y en el caso de desabasto, los establecimientos públicos tendrán la obligación de subrogarlos a favor de los usuarios en instituciones públicas o privadas”.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

A su vez, los artículos 3, 20, 66 y 68 del Reglamento Interno del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, disponen lo que sigue:

“ARTÍCULO 3.- Para efectos del presente Reglamento, en lo sucesivo, se entenderá por:

[...]

XII.- Hospital General: Es el establecimiento de segundo o tercer nivel para la atención de pacientes, en las cuatro especialidades básicas de la medicina: cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna, pediatría y otras especialidades complementarias y de apoyo derivadas de las mismas, que prestan servicios de urgencia, consulta externa y hospitalización”

“ARTÍCULO 20.- Para el estudio, planeación, despacho y adecuado cumplimiento del objeto para lo que fue creado el ISESALUD, éste contará con las siguientes Unidades Administrativas;

[...]

•Hospitales Generales, de Especialidades y Materno Infantiles”

“ARTÍCULO 66.- De conformidad con lo establecido en el modelo estatal de atención a la salud, se consideran como unidades hospitalarias y de atención médica, a los Hospitales Generales de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate, Hospital Materno Infantil de Tijuana y Hospital Materno Infantil de Mexicali”.

“ARTÍCULO 68.- Los Hospitales Generales e Integrales, tendrán las siguientes atribuciones:

I.- Desarrollar las áreas básicas, así como las líneas estratégicas prioritarias y programas institucionales establecidos por el ISESALUD, con el fin de garantizar la extensión de la prestación de los servicios de salud a la



población no derechohabiente así como a la afiliada al Seguro Popular;

II.- Organizar, administrar y operar en el ámbito de su competencia la prestación de servicios de atención médica especializada, urgencias, medicoquirúrgicos, de rehabilitación y Banco de Sangre a la población, así como emprender acciones de enseñanza e investigación médica;

III.- Proporcionar a la población, atención médica preventiva, a través de la promoción de la salud, para impulsar el mejoramiento, educación y conservación de la misma;

IV.- Proporcionar servicios a los pacientes remitidos o referenciados por otra unidad o instituciones hospitalarias, asimismo, a los que se presenten con urgencias médico-quirúrgicas;

V.- Organizar y llevar a cabo procedimientos de rehabilitación tendientes a corregir discapacidades físicas, a fin de integrar a los pacientes a una vida plena y productiva;

VI.- Operar y apoyar el seguimiento del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, como punto de enlace en los diferentes niveles de atención médica;

VII.- Administrar el recurso humano, en sus procesos de reclutamiento, selección y desarrollo de personal, con estricto apego a las disposiciones laborales y administrativas establecidas;

VIII.- Promover y apoyar la ejecución de acciones de investigación clínica para la salud, que sean procedentes y aprobadas por la Dirección de Enseñanza y Vinculación, cumpliendo con el protocolo y en los términos de la normatividad y disposiciones jurídicas aplicables;

IX.- Administrar los recursos materiales y financieros, en apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos;

X.- Observar y aplicar las condiciones generales de trabajo vigentes, y los reglamentos que en la materia sean aplicables;





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORMA B

- 17 -

XI.- Coordinar sus actividades con las instituciones que conforman el sector público, social y privado, para mejorar la prestación de los servicios de salud;

XII.- Captar, procesar y validar la información estadística en materia de salud que se genere, en los términos y con la periodicidad que se establezca, para fines de evaluación y planeación;

XIII.- Planear y elaborar el anteproyecto del presupuesto de egresos, así como proponer los programas de trabajo inherentes al mismo, para la operación y funcionamiento de la unidad hospitalaria, de acuerdo a las normas, políticas y lineamientos establecidas;

XIV.- Generar, actualizar y proporcionar periódicamente la información de oficio señalada en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en los términos establecidos en dicho ordenamiento;

XV.- Dar cumplimiento a los programas de estímulos establecidos que impulsan el reconocimiento institucional al personal de salud;

XVI.- Implementar las estrategias tendientes a la mejora continua de la calidad en la atención y servicios de salud, que se proporcionan en el Hospital;

XVII.- Participar y validar el programa anual de adquisiciones del Hospital, garantizando el estricto apego a los ordenamientos, políticas, lineamientos y demás normatividad jurídica y administrativa que regule la materia;

XVIII.- Resguardar los expedientes de los procedimientos de compra y de obra pública, que se generen en el Hospital; y,

XIX.- Las demás que le confieren las disposiciones legales y administrativas aplicables".

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DEL PODER JUDICIAL
JEFATURA DE LA
FISCALIA
COLEGIADO
DE CIRCUITO
Baja California

Del contenido de los artículos 3, 20, 66 y 68 del Reglamento Interno del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California; y, 3, 20, 66 y 68 del Reglamento Interno del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, se advierte que el Hospital General de Tecate forma parte del Sistema Estatal de Salud como dependencia de la Administración Pública del Municipio en comento, el cual es un establecimiento para la atención de pacientes en las cuatro especialidades básicas de la medicina que presta servicios de urgencia, consulta externa y hospitalización; el cual es considerado como una unidad hospitalaria y de atención médica de conformidad con lo establecido en el modelo estatal de atención a la salud, que además tiene como función la de coordinar sus actividades con las instituciones del sector público para la prestación de los servicios de salud, prestando los servicios médicos respectivos.

Luego, en el caso concreto dicho ente municipal actuó de manera unilateralmente al afectar la situación jurídica de los quejosos mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad, ya que en su carácter de dependencia de la Administración Pública del Municipio de Tecate, Baja California, en cumplimiento a un mandato de una diversa autoridad no autorizó el egreso de la menor de edad la que posteriormente canalizó a otra dependencia, negando su entrega a los peticionarios del amparo.

De tal manera que, contrario a lo sostenido en el informe justificado esos actos constituyen verdaderos actos de autoridad susceptibles de analizar bajo el escrutinio del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley Reglamentaria respectivas, ya que mediante el ejercicio de una potestad administrativa, derivada de una relación de supra a subordinación para con los quejosos, que





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORMA B. 28

- 19 -

tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional, de forma unilateral afectó su esfera jurídica sin que fuera necesario para tal efecto acudir a las instancias comunes ni que mediara la voluntad de los gobernados, al privarlos del ejercicio de los derechos que les corresponden respecto al menor de edad que fue entregado a diversa autoridad para que se encargara de su guarda y custodia con base en las diversas disposiciones que rigen la defensa de los menores y la familia.

Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, página 1089, de rubro y texto:

“AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado”.

En ese estado de cosas, al resultar infundada la causa de improcedencia soslayada en la sentencia recurrida, procede declarar firmes los aspectos que no son materia de inconformidad en el presente recurso para abocarse posteriormente a los demás agravios efectivamente hechos valer por la inconforme.

MEXICANUS
AL DE LA
ION
COLEGIADO
O CIRCUITO
CALIFORNIA

SÉPTIMO. Análisis de fondo.

Los demás agravios expuestos por el recurrente resultan sustancialmente fundados.

Cierto, en la primera parte del primero y en el segundo agravio, el inconforme sostiene que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito se apartó de la finalidad del juicio de amparo al excederse en la sentencia ya que condenó a las autoridades responsables a una medida de satisfacción que no fue materia del juicio, aun cuando su finalidad solamente es la de amparar y proteger a los gobernados en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Al respecto, la parte inconforme agrega que la condena a la medida de compensación en caso de que pudiera resultar conducente, debía hacerse valer por una diversa vía al juicio de amparo, en términos del artículo 64 de la Ley General de Víctimas, porque además de que no fue solicitada por los quejosos, el juicio de amparo guarda una finalidad diversa, ya que únicamente podía mediante éste restituirse a los quejosos en los derechos que les fueron violados, sin poder incluirse en ese sentido una medida de satisfacción.

Asiste razón al inconforme.

Efectivamente, el juicio de amparo indirecto constituye una garantía extraordinaria otorgada a favor de los gobernados para la protección de sus derechos fundamentales, mediante la cual se constituye un instrumento dotado en su favor que tiene como finalidad verificar si las autoridades comunes actuaron con base y en estricto apego a las directrices y principios constitucionales de los que derivan las legislaciones secundarias, así como determinar si los actos de autoridad o de los particulares en los términos de la Ley de Amparo, se ajustan a las legislaciones secundarias, de tal manera que se estatuye como un medio extraordinario





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORMA B-1

29

- 21 -

de defensa que sólo es procedente en los casos y en las condiciones que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan.

En efecto, la acción de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria civil, penal o administrativa que fundamentalmente consiste en motivar la prestación por parte del Estado de su actividad jurisdiccional para la declaración del derecho incierto de los particulares o del Estado como sujeto de derecho privado, y para la realización forzosa de sus intereses cuando su tutela sea cierta; sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Constitución; va dirigida a controlar el acto de la autoridad, no la ley común.

Por ende, al juicio de amparo no le incumbe ocuparse de la violación de derechos efectuada por particulares y entre particulares, ni los obstáculos que se opongan a la realización de la norma jurídica. La acción de amparo no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes; sino que va dirigida a hacer respetar la propia Constitución cuando la autoridad ha rebasado sus límites.

De ahí que la sentencia de amparo no satisfaga de manera preferente intereses tutelados por la norma jurídica meramente legal o ley común; ya que, como culminación de la acción constitucional extraordinaria, se limita a amparar y proteger al agraviado sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare; y por ello el efecto jurídico de una sentencia de amparo es el de restituir al propio agraviado en el pleno goce del derecho fundamental que fue violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación si el acto reclamado es de carácter positivo, u obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho



de que se trate y a cumplir por su parte lo que la legislación exija, si el acto es de naturaleza negativa.

De tal manera que las sentencias de amparo no son de simple anulación, sino que además deben producir efectos jurídicos concretos para restituir en el pleno goce del derecho fundamental violado por el acto de autoridad que no se ajustó al orden constitucional, porque el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, nulificando el acto reclamado e incluso los subsecuentes que sean una derivación de dicha transgresión, en virtud de que este medio extraordinario de defensa, debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, siendo menester que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, produzca la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo, o constituya una abstención, obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar siempre el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.

De lo que se sigue, que el efecto de la sentencia que otorga la protección al gobernado debe encontrarse directamente vinculada con la violación al derecho que se afectó, incluyendo las consecuencias que produzca, para que el estado de cosas que existía antes de la intervención de la autoridad que afectó la esfera jurídica del quejoso desaparezca por completo.

En este sentido, se debe acotar el hecho de que la sentencia de amparo no produce efectos constitutivos de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORMA B-1

- 23 -

derechos, los cuales sólo pueden materializarse cuando se reconozcan legalmente a través de los medios ordinarios de defensa y no se presente impedimento material o jurídico para ello, en la medida en que el órgano jurisdiccional de amparo debe limitarse a controlar el acto de autoridad reclamado, a través de su declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad nulificando el acto y sus consecuencias, más nunca llegando más allá de la violación que se detectó, pues debe existir congruencia en la afectación a que se contrae la declaración de violación de derechos del Juez de amparo con los efectos respectivos.

En el caso concreto se reclamó el que las autoridades responsable privaran a la parte quejosa de la posesión de su hijo, al enviarlo a un albergue del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, en Tecate, Baja California, con lo que se trasgredió el derecho fundamental que tutela el ejercicio de la paternidad, afectando incluso al menor de edad a contar con una familia.

Por otra parte, en la sentencia recurrida se consideró que el acto reclamado violó los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y no discriminación, igualdad e interés superior de la niñez, en atención a que la autoridad responsable se apoyó para privar de la posesión de la menor, en diversos medios de convicción que no eran válidos para tener por demostrado que no acreditaban el hecho de que la quejosa era una madre toxicómana, ya que era necesario que se le practicara un análisis pericial para tal efecto a fin de corroborar si arrojaba un resultado positivo para el uso de drogas, aunado a que el examen que se le realizó a la menor de edad era inconsistente pues se indicó que éste se practicó a una persona de sexo masculino, aun cuando la menor de edad era mujer; además, de que las pruebas periciales llevadas a



cabo durante el trámite del juicio de amparo indicaron que no existían bases para demostrar sin lugar a duda, que en efecto la parte quejosa fuera una "madre toxicómana", ni que la menor de edad presentaba síndrome de abstinencia.

De ahí que, con base en esos medulares argumentos, en la sentencia se determinó que se afectaron no solo los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, sino también que a su vez se trató de forma discriminatoria a la madre de la menor de edad, al considerarla como madre toxicómana, victimizándola al ordenarle con base en un diagnóstico ineficaz, que reconociera su adicción a las drogas para someterse a un programa de reconstrucción personal.

Con base en esas violaciones a derechos fundamentales, se otorgó el amparo para que se anulara al acto de autoridad, ya que los lineamientos respectivos implican que las autoridades responsables emitieran un acto en el que dejaran insubsistente las ordenes y actuaciones en que se apoyó la orden en la que se privó de la posesión de la menor de edad a los quejosos; además, de que de forma inmediata se reincorporara a la menor al seno familiar.

No obstante, en la sentencia se condenó a una medida de satisfacción para lograr una reparación integral a las quejas, considerándolas como víctimas de las autoridades responsables.

Ciertamente, ante el hecho victimizante derivado de la actuación de las autoridades responsables, se consideró que era necesario como medidas de satisfacción: la emisión de una declaración oficial en la que se restableciera la dignidad, reputación y los derechos de los quejosos, y de las personas estrechamente vinculadas a ellos. Una disculpa pública, que incluyera el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades de las





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORMA B-1

31

- 25 -

autoridades en la emisión de los actos reclamados. Una publicación en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, que contuviera una síntesis explicativa dirigida a la sociedad de los procedimientos a seguir ante la actualización del supuesto en que un recién nacido presente síntomas que sugieran que estuvo expuesto a la ingesta de narcóticos.

Conforme a lo expuesto, se desprende que asiste razón a la recurrente, ya que las medidas de satisfacción, no encuentran relación directa con los efectos que se debieron imprimir a la sentencia de amparo, ya que bastaba con anular el acto reclamado y ordenar la inmediata devolución al seno familiar de la menor de edad para restituir en el pleno goce de los derechos fundamentales de los peticionarios del amparo, ya que como se precisó las sentencias de amparo solo deben incluir entre sus efectos la restitución de los derechos fundamentales que fueron violentados, como si el acto no hubiera existido, lo que se lograba sin incluir las aludidas medidas de satisfacción, ya que no se violentaron los derechos públicamente del buen nombre o algún otro directamente vinculado con el acto de autoridad reclamado, que en su caso darían lugar a obligar a la autoridad a emitir una disculpa que incluyera a las personas estrechamente relacionadas con los quejosos, ni el elaborar una publicación periodística en los términos mencionados.

Efectivamente, en el particular el respecto a los derechos fundamentales conculcados con el acto de autoridad, se lograba con la destrucción del acto reclamado y sus efectos, sin que se pueda derivar de tal sentencia el efecto de obligar a la autoridad responsable a que emita otros actos de naturaleza diversas a las que motivó la mencionada protección, pues tal efecto ya iría más allá del citado restablecimiento. En este entendido, el juez de amparo puede señalar en la ejecutoria en cuestión entre otros alcances, el



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
AL COLEGIO DE
JUECES DEL CIRCUITO
DE CALIFORNIA

de condicionar la emisión de otro acto de las mismas características que el reclamado; lo que no aconteció en el caso concreto, ya que la cuestión a analizar en el amparo era únicamente el hecho de que el acto mediante el que se privó de la posesión del menor afectado se ajustaba o no al orden constitucional, para en su caso anularlo y ordenar la restitución de éste al seno familiar.

Máxime, que una sentencia de amparo no puede servir como instrumento válido para cuantificar ni condenar al pago de una reparación integral a las víctimas.

En efecto, quienes prueben haber sido dañados con motivo de una actividad administrativa irregular del Estado, deberán acreditar que ésta constituyó una violación a un derecho o a diversos derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para poder ser "reparadas integralmente" y, en algunos casos, el estándar de "reparación integral" podrá alcanzarse mediante una indemnización siempre y cuando no pueda restablecerse a la persona afectada a la situación en que se encontraba antes de la violación y la medida indemnizatoria o compensatoria sea suficiente para considerarla "justa". Dicha cuantificación implica el que el juez cuantifique con base en criterios de razonabilidad, bajo el conocimiento de todas y cada una de las particularidades del caso cuales es la reparación respectiva.

De donde se sigue, que dicha reparación permite además de anular todas las consecuencias del acto de autoridad y restablecer la situación que debió haber antes de la intervención de la autoridad a condenar al pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, mediante la apreciación de la naturaleza y extensión del daño, lo cual incluye otras medidas





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORMA B-1

32

- 27 -

compensatorias que no pueden ser alcanzadas mediante el juicio de amparo, ya que las sentencias de este medio de defensa extraordinario, como se precisó, solamente implican el anular el acto de autoridad para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban, como si nunca hubiera existido, sin incluir la reparación del daño o bien el establecimiento de medidas de satisfacción, las cuales son necesarias para lograr una reparación integral.

Lo anterior se explica, al advertir que la medida que el concepto de reparación integral que se abordó en la sentencia de amparo, comprende el hecho de que las autoridades competentes, en las vías que corresponda, deben garantizar medidas adicionales como lo son las de satisfacción, rehabilitación o las garantías de no repetición necesarias y suficientes para reparar integralmente a las personas por los daños materiales o inmateriales derivados de la actividad administrativa irregular del Estado; mientras que el juicio de amparo se limita a ordenar la anulación del acto de autoridad y sus efectos inmediatos, lo cual no incluye medidas de satisfacción ni de reparación de daño material o inmaterial, en tanto que la extensión que debe abarcar esa reparación integral constituye un derecho dudoso que debe ser cuantificado con base en pruebas ofrecidas para tal efecto, mientras que en el juicio de amparo solo se verifica si la autoridad se ajustó al orden constitucional.

Se invoca como apoyo, la tesis aislada P. XXXIX/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de dos mil catorce, Tomo I, página 203, que dice:

"SENTENCIA DE AMPARO. SÓLO RESTITUYE EL ESTADO DE COSAS QUE IMPERABA ANTES DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AFECTADO, SIN PRODUCIR



JUDICIAL DE LA
NACIÓN
JALISCO
CIRCUITO
JALISCO

EFFECTOS CONSTITUTIVOS DE DERECHOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La concesión del amparo restituye al gobernado en el pleno goce del derecho fundamental afectado, por lo que restablece las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto es de carácter positivo, o bien, ordena que se obre en el sentido de respetar el derecho transgredido, si el acto es negativo. Por lo mismo, si al presentar la demanda de amparo existía incertidumbre o indefinición con respecto a dicha situación jurídica, la autoridad de amparo no debe pronunciarse sobre derechos en disputa, que aunque estuvieran relacionados con la materia del amparo, deben dirimirse en los juicios correspondientes. Por el contrario, el órgano jurisdiccional de amparo debe limitarse a controlar el acto de autoridad reclamado, a través de su declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Así, el juicio de amparo, como medio de control constitucional, no produce efectos constitutivos de derechos, los cuales sólo podrán materializarse cuando se reconozcan legalmente a través de los medios ordinarios de defensa y no se presente impedimento material o jurídico para ello".



Igualmente se invoca la diversa tesis aislada 1a. CLXII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte que se advierte de la página 802 del tomo I del libro 5 relativo a abril de dos mil catorce de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:

"DERECHOS A UNA REPARACIÓN INTEGRAL Y A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL ESTADO. SU RELACIÓN Y ALCANCE. El artículo 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los particulares a obtener una indemnización en caso de que el Estado, a través de sus servidores públicos, cause un daño en su patrimonio, sea en el plano material o inmaterial, con motivo de su actividad administrativa irregular, mientras el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional prevé la obligación del Estado de reparar las violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con lo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORMA B-1

33

- 29 -

anterior, quienes prueben haber sido dañados en su patrimonio con motivo de una actividad administrativa irregular del Estado, deberán acreditar que ésta constituyó una violación a un derecho o a diversos derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para poder ser "reparadas integralmente" y, en algunos casos, el estándar de "reparación integral" podrá alcanzarse mediante una indemnización, como lo prevé el párrafo segundo del artículo 113 constitucional, siempre y cuando no pueda restablecerse a la persona afectada a la situación en que se encontraba antes de la violación y la medida indemnizatoria o compensatoria sea suficiente para considerarla "justa". Sin embargo, si en otros casos la indemnización fuera insuficiente para alcanzar el estándar de "reparación integral", las autoridades competentes deben garantizar medidas adicionales -como lo son las de satisfacción, rehabilitación o las garantías de no repetición- que sean necesarias y suficientes para reparar integralmente a las personas por los daños materiales o inmateriales derivados de la actividad administrativa irregular del Estado que impliquen violaciones a sus derechos humanos, en términos del párrafo tercero del artículo 1o. constitucional".

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
COLEGIO DE JUECES
PRIMER CIRCUITO
CALIFORNIA

De ahí que en la sentencia recurrida no podía jurídicamente incluirse entre los efectos del amparo la generación del derecho a la reparación integral por la actuación irregular del estado, porque tales circunstancias escapan a los fines del juicio de amparo, en la medida en que éstas solo pueden resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama, mas no sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales del orden común, tales como la exigencia de algún tipo de responsabilidad de índole patrimonial o de satisfacción, porque de lo contrario se desnaturalizaría sus fines constituyéndolo como un tribunal ordinario.

Sin que sea obstáculo a lo anterior la circunstancia de que tanto el artículo 1° de la Constitución, como el 1° de la Ley General de Víctimas, establezcan que las autoridades se encuentran obligadas a reparar las violaciones a los derechos humanos y que en todos los ámbitos de gobierno, se deba velar porque las víctimas cuentan con una reparación integral.

En efecto, los mencionados preceptos disponen lo que sigue:

"Art. 10.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones,

PODER
FE
TERCER
DEL DE
MEXICAN



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORMA B-1

34

- 31 -

las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

“Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona.

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante”.

Del contenido del artículo 1° de la Constitución se obtiene que todas las autoridades del país deben garantizar tanto el respeto y como la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el precepto 1° de la Ley General de Víctimas, dispone que todas las autoridades y Poderes

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
INSTITUCIÓN
JUNTO CIRCUITO
LA CALIFORNIA

Constitucionales, están obligados a velar por la protección de las víctimas, debiendo proporcionarles ayuda, asistenta e incluso de ser el caso otorgarles una reparación integral.

No obstante, ambos preceptos legales delimitan puntualmente que para el cumplimiento de dichas obligaciones, se debe atender siempre, el ámbito de las competencias a cada una de las autoridades del poder público corresponda.

En estas circunstancias, se concluye que todas las autoridades deben actuar ante la violación de derechos humanos de las víctimas, siempre bajo el ámbito de sus competencias, lo cual de manera alguna implica que en el juicio de amparo se pueda hacer una declaratoria de condena a la reparación integral de las víctimas, ya que las legislaciones en análisis puntualmente acotan el actuar de las autoridades siempre bajo la premisa de que se circunscriban a sus debidas competencias, es decir, aun cuando se amplió el margen de acción respecto a la tutela de los derechos humanos conforme al marco Constitucional que rige y en atención al derecho de las víctimas, tal circunstancia no implica que se deban desatender los fines del juicio de amparo cuyas sentencias no constituyen una medida de condena a la reparación integral, dado que las leyes hacen la observación de que las autoridades sólo pueden tutelar los derechos humanos y de las víctimas, en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que los legitiman en cada caso para actuar.

Lo anterior se explica, debido a que la reforma al artículo 1° de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, lo que aunado a la existencia de la Ley



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORMA B 1

- 33 -

General de Víctimas, evidencian que se deben tutelar mayormente sus derechos. No obstante, esa transformación en el ámbito jurídico nacional de ninguna manera implica el que se dejen de observar las limitaciones en cuanto a las vías de acceso a la justicia demarcadas por el ámbito de competencia que permiten la acción de las autoridades.

De lo contrario, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de la función jurisdiccional, lo que resulta inadmisibile en la medida en que esa transformación de ninguna manera implica el dejar de ejercer las atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que la ley lo dispone, ya que se reitera las propias normas legales en estudio delimitan la actuación de las autoridades al ámbito de sus debidas competencias.

Se invoca como sustento la Jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo II, página 772, de rubro y texto:

"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVE LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos



internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función”.

Como corolario a lo expuesto, se debe destacar que los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito al conocer del juicio de amparo no están autorizados para aplicar directamente la Ley General de Víctimas, en tanto que si bien es cierto deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, ya que solamente pueden aplicar en los casos a que se somete bajo su consideración las leyes que rigen a ese medio extraordinario de defensa, las cuales son la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, tal como se desprende de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1046/2012, en el que dispuso:

“...si bien los Tribunales Colegiados pueden ejercer de oficio el control difuso de regularidad constitucional, lo cierto es que, deben hacerlo en los términos dispuestos en el artículo 1° Constitucional, párrafo tercero, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, aquellas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, a saber: Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo...”.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORMA B-V

- 35 -

Apoya a lo expuesto, la Tesis Aislada P. IX/2015 (10a.) del Pleno del Máximo Tribunal del País, que se encuentra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, agosto de dos mil quince, Tomo I, página 355, que dice:

“CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. Por imperativo del artículo 1o., en relación con el diverso 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para lo cual cuentan con la facultad de ejercer un control de regularidad constitucional difuso o ex officio, que corresponde a un sistema que confía a cualquier autoridad, sin importar su fuero, la regularidad constitucional de las leyes y por virtud del cual toda autoridad debe, ante un caso concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar la norma que debería fundar su acto, si ésta es violatoria de un derecho humano contenido en la Carta Fundamental o en un tratado internacional. Ahora bien, cuando se habla del control ex officio debe tenerse presente que dicha expresión significa que ese tipo de examen pueden hacerlo, por virtud de su cargo de Jueces, aun cuando: 1) no sean de control constitucional; y, 2) no exista una solicitud expresa de las partes, pues la propia Norma Fundamental los faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que viola derechos humanos, de manera que el control difuso no constituye un proceso constitucional sino sólo una técnica al alcance del Juez para que pueda ejercer un control de constitucionalidad en un proceso, sea éste constitucional o de cualquier otra naturaleza y cuyo ejercicio da lugar al dictado de una resolución con efectos entre las partes. En estas circunstancias, se concluye que los Tribunales Colegiados de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación,



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
TRIBUNAL COLEGIADO
QUINTO CIRCUITO
BAJA CALIFORNIA

deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, con la observación de que sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla”.

Conforme a las premisas destacadas, se llega a la conclusión de que los agravios en análisis resultan fundados, ya que en la sentencia de amparo no se debió emitir una condena a una medida de satisfacción, porque con ello se desconoció la finalidad y alcance que debe contener un fallo protector, el que se limita al restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes de la violación detectada o en su caso a obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental que se violó, más nunca puede servir para fincar condenas a medidas de satisfacción porque tal circunstancia escapa a la competencia de los jueces de amparo y a su propio fin.

De tal manera que, al imponer la condena a diversas medidas de satisfacción, el secretario que dictó la sentencia impugnada actuó ilegalmente, contra las instituciones y normas que rigen al juicio de amparo, ya que entre ellas no existen ninguna concernientes a declarar una condena en ese sentido, por lo cual las ejecutorias en el juicio de amparo no deben emitir ningún pronunciamiento a éste respecto; aunado a que las propias normas en que se apoyó para resolver en el sentido de dicha condena, no lo autorizaban para tal efecto, dado que tal como se precisó, tanto el artículo 1° de la Constitución, como el precepto 1° de la Ley General de Víctimas, puntual y sin lugar a duda, deja claro que para la reparación integral de las víctimas derivadas





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORMA B-1

37

- 37 -

de la violación de sus derechos humanos se debe atender a las debidas competencias y al no hacerlo de esa forma. .

Se invoca para sustentar lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la Tesis Aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 2420 del Tomo LIX de las Quintas Épocas del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"COSTAS EN AMPARO, ES ILEGAL LA CONDENACION EN, COMO IMPORTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL. Las costas son una institución de carácter procesal, aun cuando en principio puedan conceptuarse como una especie de daños y perjuicios originados por el abuso del derecho; consiguientemente, la facultad de hacerlas efectivas, no nace con el ejercicio de la acción, ni depende del resultado de ésta, ni se van causando durante el desarrollo del procedimiento, ni pueden ser objeto de estipulación contractual; pues son el resultado de la sentencia que hace la calificación de la actitud que las partes han observado durante el procedimiento, o impone la condena en acatamiento a la calificación hecha por la ley, en cuanto a la propia actitud, de acuerdo con los sistemas que adopta la misma ley. Ahora bien, como en las instituciones y normas que rigen al juicio de amparo, no existen algunas concernientes a las costas, las ejecutorias en el juicio de garantías ningún pronunciamiento hacen a éste respecto; de donde se infiere que no habiendo sentencia de condena, no se concede la facultad de hacerlas efectivas. Si pudieran exigirse por el concepto de daños y perjuicios, como consecuencia de valoración de los derechos cuya realización se persiguió ante la autoridad común, esto sería materia del ejercicio de la acción respectiva, con el objeto de lograr la condena para el causante de los daños, y entonces el derecho relativo sería resultado de la sentencia; y no existiendo ésta, no existe tampoco el derecho de hacer efectivas las costas. En consecuencia, si en un juicio de responsabilidad civil se dicta sentencia absolutoria, la parte actora apela de la sentencia: en segunda instancia se revoca



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
JUNTO CIRCUITO
DE LA CALIFORNIA

aquella y se condena al demandado al pago de las cantidades reclamadas y de las costas, el demandado promovió juicio de garantías contra el fallo de segunda instancia; se dicta sobreseimiento en el juicio; el tercero perjudicado inicia un incidente de costas, y el tribunal de alzada dicta fallo condenatorio en el propio incidente, se violan los artículos 14 y 16 constitucionales. Por otra parte, podría hasta surgir la cuestión relativa a la competencia que pudiera tener el tribunal del orden común, para hacer estimación de las costas en amparo y para ejecutar la resolución recaída en ese punto, y evidentemente existe esa falta de competencia, por que se trata de hacer efectivas las causadas en otra esfera constitucional. La intención del legislador en materia de amparo, de imponer en los casos de temeridad de los litigantes que en el intervienen, sanciones especiales y no la carga de cubrir las costas, se hace patente en los artículos de la ley actualmente en vigor y de la antigua, que establecen que cuando se sobresea un amparo o se niegue por haber sido interpuesto sin motivo, debe imponerse una multa al promovente y a su abogado, pues las causas de sobreseimiento, en lo general, implican temeridad o abuso del derecho, y al definirse cuando debe entenderse que se promovió el amparo sin motivo, se alude a verdaderos motivos para estimar temerario a quien no obtiene".



De conformidad con lo expuesto, al resultar parcialmente fundados los agravios expresados por la autoridad inconforme, lo que se impone es modificar la sentencia impugnada solo en cuanto a los efectos para los que se otorgó la protección de la Justicia Federal y, en consecuencia, se deberá estar solo a lo que sigue:

a). La autoridad responsable Subprocuradora para la Defensa del Menor y la Familia, en Tecate, Baja California, deberá emitir una resolución en la que deje sin efecto toda las órdenes y actuaciones desahogadas en el procedimiento [REDACTED] de su índice;

2. En la misma resolución, deberá decretar la inmediata reincorporación de la menor que actualmente lleva



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA.

FORMA B-1

38

- 39 -

el nombre de [REDACTED] a su núcleo familiar a lado de sus padres biológicos [REDACTED]

[REDACTED] también conocidos como [REDACTED]

el entendido de que su entrega deberá efectuarse sin condicionamiento alguno.

Lo anterior, con independencia de que en el ámbito de sus atribuciones la mencionada autoridad responsable lleve a cabo las investigaciones que estime conducentes en caso de considerar que existen indicios de posibles actos que coloquen en estado de vulnerabilidad a la menor sujeta a ese procedimiento, pero en uno distinto en el que se cumplan las formalidades del procedimiento puntualizadas en esta resolución.

Por lo expuesto y fundado se,

RESUELVE

PRIMERO. En la materia del recurso de revisión se **MODIFICA** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión **AMPARA Y PROTEGE** a [REDACTED]

[REDACTED] también conocidos como [REDACTED]

[REDACTED] contra los actos reclamados al Subprocurador para la Defensa del Menor y la Familia en Tecate, Baja California, del Desarrollo Integral Familiar; además, contra el Director del Hospital General de Tecate, Baja California, en los términos precisados en la parte final de la presente ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registro, con testimonio autorizado de la resolución vuelvan los autos al lugar de procedencia y oportunamente archívese el expediente.

Así lo resolvió el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de

OS MEXICANOS
CIAL DE LA
ACION
AL COLEGIADO
NTO CIRCUITO
& CALIFORNIA

votos de los Magistrados Licenciados Gustavo Gallegos Morales, Gerardo Manuel Villar Castillo, y Licenciado Marco Antonio Romero Castillo Secretario en funciones de Magistrado, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el once de febrero de dos mil catorce, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes firman en unión de la Secretaria de Acuerdos, Licenciada Angelina Sosa Camas que autoriza y da fe.-


MAGISTRADO PRESIDENTE

LIC. GUSTAVO GALLEGOS MORALES


MAGISTRADO

LIC. GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO

SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO


LIC. MARCO ANTONIO ROMERO CASTILLO

SECRETARIA DE ACUERDOS


LIC. ANGELINA SOSA CAMAS

GMVC/JMGA/yrp@

Mexicali, Baja California, a 16 de agosto-16
el suscrito (a) secretario (a) de Acuerdos del Tercer
Tribunal Colegiado del Décimoquinto Circuito hago
constar que en esta fecha se concluyó el engrosado
de la resolución de fecha 11-08-16 recaída
en el presente ARA 168-16 Do y fe.-


LIC. ANGELINA SOSA CAMAS

EN 17 AGO 2016 SIENDO LAS NUEVE HORAS
SE NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA, EL AUTO O RESOLUCIÓN
QUE ANTECEDE, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS 26 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.-DOY FE.

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocumentoRespuesta.pdf
Secuencia: 2303328

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	ANGELINA SOSA CAMAS	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SOCA630706MCSSMN01			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66000000000000000000000000000009ef9	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/11/2018T20:51:52Z / 26/11/2018T14:51:52-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	92 1e 4e ba 28 cf 11 7b fe e1 6b 6e 40 b9 7f 1c b5 35 5a ef 1b 1a 75 28 95 49 53 e7 08 65 6f f1 5f a9 b8 d0 53 f4 b6 76 4a e8 8b c9 2c 21 57 53 e4 4f a0 03 7b d5 16 76 53 e7 be 0d 95 1a 93 d0 f6 f4 25 1c 1f 57 a9 45 23 44 0d 30 90 32 21 6f a3 f5 bd 05 b2 b9 49 e6 b0 eb 5c 98 c8 d2 db 3f ea 5f 33 fd 6b e9 7d a9 22 fa f5 a6 eb 11 78 de f3 45 bb cd 78 d2 7d 8a 34 32 96 21 97 41 5b cd f2 4f bc 31 6d 78 fa 24 45 41 75 89 11 81 17 29 bd 4b 14 2f d4 0e 73 89 7f e5 65 14 33 21 66 45 c9 c7 7b 60 d1 c4 12 46 93 07 12 1f 53 78 6f ae 39 78 17 b2 dd cd 31 73 23 f0 3f 26 cd 2b a3 44 fb b6 1c ee ea 6e 93 44 6c 2a 02 c3 82 73 b8 5f f9 7a 84 c3 5b b9 28 61 2f d5 6c ed 38 94 d3 aa 01 69 ee b4 91 9f 48 a5 58 a3 a0 f7 d6 e6 5d de 69 95 e1 75 79 5f 2b 0e 15 33 c2 8d 9c 26 8e a2			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/11/2018T20:50:51Z / 26/11/2018T14:50:51-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66000000000000000000000000000009ef9			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/11/2018T20:51:52Z / 26/11/2018T14:51:52-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2306215			
	Datos estampillados:	6DF5B9E80948FA1EE4876CC27996FEF5851435AE			